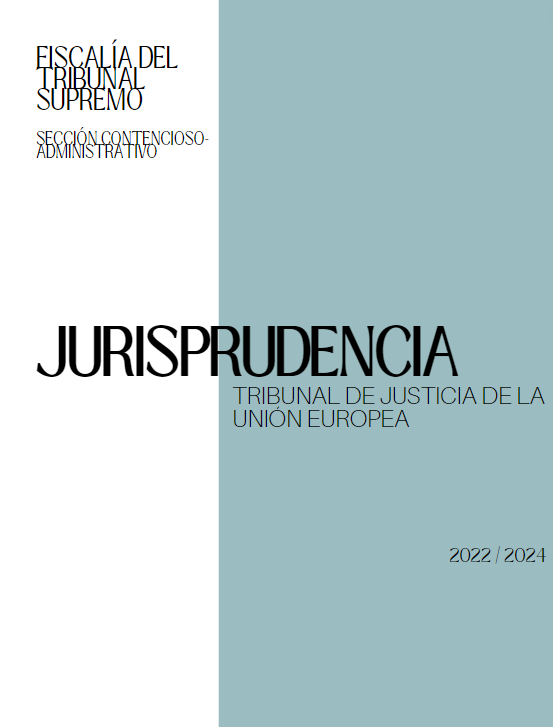
****

[AYUDAS DE ESTADO 8](#_Toc183166232)

[STJUE Gran Sala 12/1/23 C‑702/20 y C‑17/21. Ayudas de Estado. Energía. Electricidad. 8](#_Toc183166233)

[STJUE 4ª 7/12/23 C‑700/22. Ayuda existente y nueva ayuda. Ayuda concedida contraviniendo las normas de procedimiento establecidas en el artículo 108 TFUE, apartado 3. Expiración del plazo de prescripción previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2015/1589. Obligación del juez nacional de ordenar la recuperación de la ayuda. 9](#_Toc183166234)

[STJUE Octava 30/5/24 de 30 de mayo de 2024 C‑110/23 P Ayudas de Estado. Sector portuario. Régimen de exención del impuesto sobre sociedades aplicado por el Reino de España en favor de los puertos situados en la provincia de Bizkaia. Decisión por la que se declara la incompatibilidad de la ayuda con el mercado interior. Ayuda existente. Ventaja. Carga de la prueba. Medidas apropiadas. 9](#_Toc183166235)

[Se trata de un recurso de casación que versa, en esencia, sobre la calificación de ayudas existentes incompatibles con el mercado interior dada por la Comisión a la exención total del impuesto sobre sociedades concedida para los beneficios generados por las autoridades portuarias del País Vasco, que incluye el territorio histórico de Gipuzkoa y el territorio histórico de Bizkaia (en lo sucesivo, «exención fiscal de Bizkaia»), y a la exención parcial del impuesto sobre sociedades concedida para los beneficios generados por las autoridades portuarias del resto de España. 9](#_Toc183166236)

[CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 11](#_Toc183166237)

[STJUE Tercera 19/1/23 C‑292/21. Concesión de servicio público. Servicio en el ámbito del transporte. Impartición de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del permiso de conducción. Razones imperiosas de interés general. Servicio de interés económico general. 11](#_Toc183166238)

[DERECHO SANCIONADOR 13](#_Toc183166239)

[STJUE Segunda 11/5/23 C-155/22. Transportes por carretera. Normas comunes relativas a las condiciones de ejercicio de la profesión de transportista por carretera. Normativa nacional que permite trasladar la responsabilidad penal por infracciones graves relativas al tiempo de conducción y a los períodos de descanso de los conductores. No consideración de las sanciones impuestas por esas infracciones al apreciar la honorabilidad de la empresa de transporte por carretera. 13](#_Toc183166240)

[LIBERTAD DE CIRCULACIÓN 15](#_Toc183166242)

[STJUE Primera 16/6/22 C‑577/20 Reconocimiento de cualificaciones profesionales. Profesiones reguladas. Requisitos para la obtención del derecho de acceso al título de psicoterapeuta en un Estado miembro sobre la base de un título en psicoterapia expedido por una universidad establecida en otro Estado miembro. Libertades de circulación y establecimiento. Apreciación de la equivalencia de la formación en cuestión. Cuestionamiento, por el Estado miembro de acogida, del grado de conocimientos y de cualificaciones que un título expedido en otro Estado miembro permite presumir. 15](#_Toc183166243)

[STJUE (Sala Tercera) 15/9/22 C‑22/21 Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Concepto de “otro miembro de la familia que viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal”. 16](#_Toc183166244)

[STJUE Cuarta 2/3/23 C270/21. Libre circulación de los trabajadores. Reconocimiento de cualificaciones profesionales en un Estado Miembro. Derecho a ejercer la profesión de maestro de educación infantil. Profesión regulada. Derecho de acceso a la profesión sobre la base de un título emitido en el Estado miembro de origen. Cualificación profesional obtenida en un tercer país. 16](#_Toc183166245)

[Conclusiones AG 9/3/23 C680/21. Libre circulación de los trabajadores. Reglamentos de la UEFA y de las federaciones nacionales de fútbol asociadas. Jugadores formados localmente. 16](#_Toc183166246)

[STJUE Gran Sala 5/12/23 C‑128/22. Medidas que limitan la libre circulación de los ciudadanos de la Unión por razones de salud pública. Medidas de alcance general. Normativa nacional que establece las prohibiciones de salir del territorio nacional para realizar viajes no esenciales a Estados miembros clasificados como zona de alto riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la obligación para todos los viajeros que entren en el territorio nacional desde alguno de esos Estados miembros de someterse a pruebas de detección y cumplir una cuarentena. Código de fronteras Schengen. Ejercicio de las competencias de policía en materia de salud pública. Equivalencia con el ejercicio de inspecciones fronterizas. Posibilidad de restablecer controles en las fronteras interiores en el contexto de la pandemia de COVID-19. Controles realizados en un Estado miembro en el marco de medidas de prohibición del cruce de las fronteras para realizar viajes no esenciales desde o hacia Estados del espacio Schengen clasificados como zona de alto riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19. 18](#_Toc183166247)

[STJUE Segunda 22/2/24 C-283/21. Seguridad social de los trabajadores inmigrantes. Pensión por incapacidad laboral absoluta. Consideración de los períodos de educación de los hijos cubiertos en otro Estado miembro. Libre circulación de los ciudadanos. Vínculo suficiente entre estos períodos de educación y los períodos de seguro cubiertos en el Estado miembro deudor de la pensión. 19](#_Toc183166248)

[STJUE Gran Sala 9/5/24 C‑75/22 Trabajadores. Cualificaciones profesionales. Profesión regulada. Arquitectos. Veterinarios. Reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Obligación de los Estados miembros de velar por que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida determinen el estatuto de las personas que realizan un período de prácticas o se preparan para una prueba de aptitud. Obligación de los Estados miembros de garantizar, en particular, a los veterinarios y a los arquitectos la posibilidad de realizar prestaciones, en el marco de la libre prestación de servicios, al amparo del título profesional del Estado miembro de acogida. Obligación de los Estados miembros de velar por que los titulares de un título profesional de formación universitaria o de un nivel reconocido equivalente en farmacia que cumplan las condiciones indicadas en el artículo 44 de la referida Directiva sean habilitados al menos para el acceso a las actividades mencionadas en el artículo 45, apartado 2, de la citada Directiva, sin perjuicio, en su caso, de la exigencia de una experiencia profesional complementaria. Obligación de los Estados miembros de velar por que la autoridad competente del Estado miembro de acogida disponga de un plazo de un mes para acusar recibo de la solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales y para informar, en su caso, al solicitante de la falta de cualquier documento. 20](#_Toc183166249)

[STJUE Décima 13/6/24 C‑62/23 Prohibiciones del derecho de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Conducta que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Denegación de la expedición de una tarjeta de residencia temporal de familiar de un ciudadano de la Unión a causa de antecedentes policiales. Informe policial desfavorable debido a una detención. 20](#_Toc183166250)

[LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO 23](#_Toc183166251)

[STJUE Gran Sala 7/9/22 C‑391/20 Libertad de establecimiento. Organización del sistema educativo. Centros de educación superior. Obligación de impartir los programas de estudios en la lengua oficial del Estado. Identidad nacional. Defensa y promoción de la lengua oficial. Principio de proporcionalidad. 23](#_Toc183166252)

[STJUE 2/2/23 C-372/21. Estatuto de las Iglesias y asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión. Libertad de establecimiento. Restricciones. Justificación. Principio de proporcionalidad. Subvenciones para un centro docente privado. Solicitud presentada por una asociación religiosa establecida en otro Estado miembro. Centro reconocido por dicha asociación como colegio confesional. 23](#_Toc183166253)

[STJUE Primera 8/6/23 C-50/21. Servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC). Régimen de autorización que implica el otorgamiento, además de una autorización que permite prestar servicios urbanos e interurbanos de transporte en todo el territorio nacional, de una segunda licencia de explotación para poder prestar servicios urbanos de transporte en un ámbito metropolitano. Limitación del número de licencias de servicios de VTC a una por cada treinta licencias de taxi. 23](#_Toc183166254)

[STJUE Séptima 2/3/23 C695/21. Restricciones a la libre prestación de servicios. Juegos de azar. Normativa de un Estado miembro que establece una prohibición general de que los establecimientos de juegos de azar hagan publicidad. Excepción de pleno Derecho de esta prohibición para los establecimientos que dispongan de una licencia de explotación expedida por las autoridades de ese Estado miembro. Imposibilidad de excepción para los establecimientos situados en otro Estado miembro. 24](#_Toc183166255)

[STJUE Tercera 25/4/24 C-276/22 Sociedad establecida en un Estado miembro pero que ejerce sus actividades en otro Estado miembro. Funcionamiento y gestión de la sociedad. Normativa nacional que prevé la aplicación de la ley del Estado miembro en el que una sociedad ejerce sus actividades. Restricción a la libertad de establecimiento. Justificación. Protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores. Lucha contra las prácticas abusivas y los montajes artificiales. 24](#_Toc183166256)

[STJUE Segunda 30/5/24 C‑662/22 y C‑667/22 Libre prestación de servicios. Prestadores de servicios de la sociedad de la información. Obligación de inscribirse en un registro de operadores de comunicaciones. Obligación de facilitar información sobre la estructura y la organización. Obligación de abonar una contribución económica. Principio de control en el Estado miembro de origen. Excepciones. Concepto de “medidas tomadas en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información”. Airbnb. 25](#_Toc183166257)

[STJUE Segunda 30/5/24 C‑664/22 y C‑666/22 Libre prestación de servicios. Prestadores de servicios de la sociedad de la información. Obligación de inscribirse en un registro de operadores de comunicaciones. Obligación de facilitar información sobre la estructura y la organización. Obligación de abonar una contribución económica. Principio de control en el Estado miembro de origen. Excepciones. Concepto de “medidas tomadas en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información”. Google. 25](#_Toc183166258)

[STJUE Segunda 30/5/24 C‑664/22 y C‑666/22 Libre prestación de servicios. Prestadores de servicios de la sociedad de la información. Obligación de inscribirse en un registro de operadores de comunicaciones. Obligación de facilitar información sobre la estructura y la organización. Obligación de abonar una contribución económica. Principio de control en el Estado miembro de origen. Excepciones. Concepto de “medidas tomadas en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información”. Amazon. 26](#_Toc183166259)

[STJUE Tercera 11/7/24 C‑598/22 Artículo 49 TFUE. Concesiones del dominio público marítimo-terrestre. Extinción y renovación. Normativa nacional que prevé la cesión al Estado a título gratuito de las obras no desmontables realizadas en el dominio público. Restricción. Inexistencia. 26](#_Toc183166260)

[LIBERTAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 28](#_Toc183166261)

[STJUE Quinta 20/6/24 C‑540/22 Desplazamiento de nacionales de terceros países por una empresa de un Estado miembro para realizar trabajos en otro Estado miembro. Duración superior a 90 días dentro de un período de 180 días. Obligación de los trabajadores desplazados nacionales de terceros países de ser titulares de un permiso de residencia en el Estado miembro de acogida en caso de prestación de más de tres meses. Limitación del período de validez de los permisos de residencia expedidos. Cuantía de las tasas correspondientes a la solicitud de un permiso de residencia. Restricción a la libre prestación de servicios. Razones imperiosas de interés general. Proporcionalidad. 28](#_Toc183166262)

[STJUE Primera 4/10/24 C-242/23 Libre prestación de servicios. Restricciones a las actividades multidisciplinares. Profesión regulada. Normativa nacional que establece, con carácter general, una incompatibilidad entre el ejercicio conjunto de la actividad de intermediación inmobiliaria y la de administración de comunidades de propietarios de inmuebles. Requisitos de independencia e imparcialidad. Proporcionalidad de la restricción. Consecuencias de la conclusión de un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra un Estado miembro. 29](#_Toc183166263)

[STJUE Sala Segunda 29/2/24 C-606/21 Medicamentos para uso humano. Venta a distancia al público de medicamentos. Medicamentos de uso humano no sujetos a receta médica. Personas autorizadas o facultadas para vender a distancia medicamentos al público. Facultad de los Estados miembros de imponer condiciones justificadas por razón de protección de la salud pública en relación con la distribución al por menor en su territorio de medicamentos vendidos en línea. Servicios de la sociedad de la información. Servicio de puesta en contacto de farmacéuticos y clientes para la venta en línea de medicamentos. 31](#_Toc183166264)

[STJUE 5ª 21/9/23 (C‑47/22) Productos farmacéuticos y cosméticos. Medicamentos para uso humano. Directrices sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano (PCD). Cadena de distribución de productos farmacéuticos. Titular de una autorización de distribución al por mayor que adquiere medicamentos de personas que están autorizadas para dispensar medicamentos al público, pero que no son a su vez ni titulares de una autorización de distribución ni están dispensadas de la obligación de obtener tal autorización. Conceptos de “personal competente en número suficiente” y de “persona responsable”. Suspensión o revocación de la autorización de distribución al por mayor. 32](#_Toc183166265)

[MERCADOS REGULADOS 34](#_Toc183166266)

[STJUE Quinta 30/3/23 C5/22. Mercado interior de la electricidad. Obligaciones y competencias de la autoridad reguladora nacional. Protección de los consumidores. Gastos de gestión administrativa. Competencia de la autoridad reguladora nacional para ordenar el reembolso de los importes pagados por los clientes finales con arreglo a cláusulas contractuales cuya utilización ha sido sancionada por esa autoridad. 34](#_Toc183166267)

[STJUE Quinta 20/4/23 C-580/21. Fomento de la energía procedente de fuentes de energía renovables. Acceso a las redes de transporte y de distribución. Acceso prioritario conferido a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables. Producción a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales. 34](#_Toc183166268)

[NACIONALIDAD A LA UNIÓN EUROPEA 36](#_Toc183166269)

[Conclusiones 26/1/23 C 689-21. Ciudadanía de la Unión. Nacionalidad de un Estado miembro y de un Estado tercero. Pérdida automática de la nacionalidad del Estado miembro al cumplir veintidós años por falta de vínculo efectivo si no se solicita su conservación antes de esa fecha. Pérdida de la ciudadanía de la Unión. Examen a la luz del principio de proporcionalidad de las consecuencias de la pérdida desde el punto de vista del Derecho de la Unión. 36](#_Toc183166270)

[STJUE Gran Sala 5/9/23 C-689/21. Ciudadanía de la Unión Europea. Ciudadano que tiene la nacionalidad de un Estado miembro y la nacionalidad de un tercer país. Pérdida automática de la nacionalidad del Estado miembro a la edad de veintidós años por ausencia de vínculo de conexión efectivo con ese Estado miembro, a falta de solicitud de conservación de la nacionalidad antes de la fecha en que se cumple dicha edad. Pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión. Examen del principio de proporcionalidad de las consecuencias de esta pérdida a la luz del Derecho de la Unión. 36](#_Toc183166271)

[SANIDAD 39](#_Toc183166272)

[STJUE 7ª 15/6/23 C‑411/22. Seguridad social. Concepto de “prestaciones de enfermedad”. Libre circulación de los trabajadores. Ventajas sociales. Discriminación. Justificaciones. COVID-19. Aislamiento de trabajadores ordenado por la autoridad sanitaria nacional. Indemnización de dichos trabajadores por el empresario. Reembolso del empresario por la autoridad competente. Exclusión de los trabajadores transfronterizos aislados en virtud de una medida adoptada por la autoridad de su Estado de residencia. 39](#_Toc183166273)

[SEGURIDAD 41](#_Toc183166274)

[STJUE Segunda 18/1/24 C-451/22. Transporte aéreo. Seguimiento de sucesos que pongan en peligro la seguridad aérea. Confidencialidad de la información relativa a estos sucesos — Alcance de esta confidencialidad. Libertad de expresión y de información. Libertad de los medios de comunicación. Solicitud de información sobre la destrucción de una aeronave cuando sobrevolaba el Este de Ucrania, presentada por empresas que operan en el sector de los medios de comunicación. 41](#_Toc183166275)

[SEGURIDAD SOCIAL 43](#_Toc183166276)

[STJUE 7ª 12/10/23 C-45/22. Seguridad social de los trabajadores migrantes. Acumulación de prestaciones de distinta naturaleza. Aplicación de las normas nacionales que prohíben la acumulación. Cálculo de la pensión de supervivencia. División de las cuantías de la prestación o prestaciones u otros ingresos, tal y como hayan sido computados, por el número de prestaciones. Concepto de “cuantías tal y como hayan sido computadas. Inmigración. 43](#_Toc183166277)

[STJUE Sala Séptima 11/4/24 C‑116/23 Inmigración. Prestaciones familiares. Prestaciones por enfermedad. Ámbito de aplicación. Prestación por cuidado de un familiar. Nacional de un Estado miembro que reside y trabaja en otro Estado miembro y presta asistencia a un miembro de su familia en el primer Estado miembro. Carácter accesorio a la asignación de dependencia. Igualdad de trato. 43](#_Toc183166278)

[STJUE Sala Séptima 25/4/24 C‑36/23 Prestaciones familiares. Normas de prioridad en caso de acumulación de prestaciones. Obligación de la institución del Estado miembro que es competente con carácter subsidiario de trasladar la solicitud de prestaciones familiares a la institución del Estado miembro que es competente con carácter prioritario. Inexistencia de una solicitud de prestaciones familiares en el Estado miembro de residencia del hijo. Recuperación parcial de las prestaciones familiares abonadas en el Estado miembro de la actividad por cuenta ajena de uno de los padres. 44](#_Toc183166279)

[TELECOMUNICACIONES 46](#_Toc183166281)

[STJUE Sala Cuarta 17/11/22 C‑243/21 Telecomunicaciones. Competencia de la autoridad nacional de reglamentación para imponer condiciones establecidas ex ante que regulan el acceso a la infraestructura física de un operador sin peso significativo en el mercado. Inexistencia de conflicto sobre el acceso. 46](#_Toc183166282)

[STJUE Quinta 20/4/23 C-329/21. Redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Adjudicación de derechos de uso de frecuencias. Procedimiento de subasta. Sociedad holding no registrada como proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro de que se trata. Exclusión del procedimiento de adjudicación. Derecho a interponer recurso contra la decisión de adjudicación. 46](#_Toc183166283)

[STJUE Tercera 30/1/24 C‑255/21. Servicios de comunicación audiovisual. Límites impuestos al tiempo de difusión horaria de publicidad televisiva. Excepciones. Concepto de “anuncios realizados por el organismo de radiodifusión televisiva en relación con sus propios programas”. Anuncios emitidos por ese organismo para promocionar los programas de una emisora de radio que pertenece al mismo grupo de radiodifusión que dicho organismo. 47](#_Toc183166284)

[çSTJUE Quinta 16/3/23 C339/21. Redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes. Normativa nacional en materia de reembolso de los costes derivados de las actividades de interceptación ordenadas a los operadores de telecomunicaciones por las autoridades judiciales. Inexistencia de mecanismo de reembolso íntegro. Principios de no discriminación, proporcionalidad y transparencia. 47](#_Toc183166285)

[TRANSPORTES 50](#_Toc183166286)

[STJUE (Sala Primera) 8/9/22 C‑614/20 Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. Imposición mediante reglas generales de una obligación de transporte gratuito de determinadas categorías de viajeros. Obligación de que la autoridad competente conceda a los operadores una compensación de servicio público. Método de cálculo. 50](#_Toc183166287)

[STJUE Sala Tercera 6/10/22 C‑266/21 Transportes. Suspensión del derecho a conducir un vehículo de motor. Permiso de conducción expedido por el Estado de residencia normal por canje de un permiso de conducción expedido por otro Estado. Negativa del primer Estado a ejecutar una resolución de suspensión del derecho a conducir adoptada por el segundo Estado. Obligación del segundo Estado de no reconocer, en su territorio, la validez del permiso de conducir suspendido. 51](#_Toc183166288)

[STJUE Sala Décima 13/10/22 C‑437/21 Contratos de servicio público. Transportes. Servicios públicos de transporte marítimo rápido de viajeros. Asimilación a servicios de transporte ferroviario efectuado por vía marítima. 51](#_Toc183166289)

[STJUE Octava de 21/3/24 C‑703/22 Transportes por carretera. Permiso de conducción. Condiciones de expedición o de renovación. Normas mínimas relativas a la aptitud física y mental. Visión. Principio de proporcionalidad. Persona que no cumple la norma relativa al campo visual. Dictamen favorable a la aptitud para conducir emitido por expertos médicos. Margen de apreciación en un caso individual a falta de excepción expresa. 51](#_Toc183166290)

# AYUDAS DE ESTADO

## 

## STJUE Gran Sala 12/1/23 C‑702/20 y C‑17/21. Ayudas de Estado. [Energía](#Energía_H25). Electricidad.

Una normativa nacional que obliga a la **empresa de distribución de electricidad** autorizada a **comprar la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables a un precio superior al de mercado y que establece que los sobrecostes resultantes se financiarán mediante una exacción obligatoria soportada por los consumidores finales o que prevé que los fondos destinados a financiar estos sobrecostes permanecerán constantemente bajo control público** constituye una intervención «mediante fondos estatales» (*ex artículo 107 TFUE, apartado 1*).

La **calificación de una ventaja como «ayuda de Estado»** no está sujeta al requisito de que el mercado de que se trate haya sido previamente plenamente liberalizado (*ex artículo 107 TFUE, apartado 1*).

Cuando una normativa nacional ha instaurado una «ayuda de Estado», el **pago de una cantidad reclamada judicialmente** con arreglo a dicha normativa también constituye tal ayuda (*ex artículo 107 TFUE, apartado 1*).

Cuando una normativa nacional que establece un derecho legal a un pago incrementado para la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables constituye una «ayuda de Estado», las **demandas judiciales dirigidas a obtener el beneficio completo de ese derecho** deben considerarse solicitudes de pago de la parte de esa ayuda de Estado no percibida, y no solicitudes dirigidas a la concesión de una ayuda de Estado distinta por el juez que conoce del asunto (*ex artículo 107 TFUE, apartado 1*).

Cuando una ayuda de Estado no corresponde a ninguna de las categorías de ayudas existentes previstas en el artículo 1, letra b), del Reglamento, tal ayuda, incluida la parte de esta cuyo pago se reclama posteriormente, debe calificarse de **«nueva ayuda»** (*ex artículo 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE]*).

El juez nacional puede **estimar una demanda que tenga por objeto el pago de una cantidad correspondiente a una nueva ayuda** no notificada a la Comisión Europea, a condición de que dicha ayuda sea previamente debidamente notificada por las autoridades nacionales de que se trate a dicha institución y de que esta dé su conformidad o se considere que ha dado su conformidad a este respecto (*ex artículo 108 TFUE, apartado 3, y los artículos 2, apartado 1, y 3 del Reglamento 2015/1589*).

Carece de pertinencia, para apreciar si unas cantidades tienen carácter de «ayuda de Estado» que dichas cantidades se reclamen a una autoridad pública distinta de la que, en principio, está obligada a abonarlas con arreglo a la normativa nacional de que se trate y cuyo presupuesto esté destinado únicamente a garantizar su propio funcionamiento (*ex artículo 107 TFUE, apartado 1*).

## STJUE 4ª 7/12/23 C‑700/22. Ayuda existente y nueva ayuda. Ayuda concedida contraviniendo las normas de procedimiento establecidas en el artículo 108 TFUE, apartado 3. Expiración del plazo de prescripción previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2015/1589. Obligación del [juez nacional](#Juez_nacional_H25) de ordenar la [recuperación](#Recuperación_H25) de la ayuda.

El artículo 108 TFUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que **los órganos jurisdiccionales nacionales pueden ordenar la devolución de una ayuda de Estado concedida incumpliendo la obligación de notificación previa** establecida en dicha disposición aunque el plazo de prescripción previsto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE, haya expirado respecto de esa ayuda, de modo que deba considerarse ayuda existente conforme a los artículos 1, letra b), inciso iv), y 17, apartado 3, de dicho Reglamento.

## STJUE Octava 30/5/24 de 30 de mayo de 2024 C‑110/23 P Ayudas de Estado. Sector [portuario](#Puertos_H29). Régimen de exención del [impuesto sobre sociedades](#Impuesto_sobre_sociedades_H29) aplicado por el Reino de España en favor de los puertos situados en la provincia de Bizkaia. Decisión por la que se declara la incompatibilidad de la ayuda con el mercado interior. Ayuda existente. Ventaja. Carga de la prueba. Medidas apropiadas.

Se trata de un recurso de casación que versa, en esencia, sobre la calificación de ayudas existentes incompatibles con el mercado interior dada por la Comisión a la exención total del impuesto sobre sociedades concedida para los beneficios generados por las autoridades portuarias del País Vasco, que incluye el territorio histórico de Gipuzkoa y el territorio histórico de Bizkaia (en lo sucesivo, «exención fiscal de Bizkaia»), y a la exención parcial del impuesto sobre sociedades concedida para los beneficios generados por las autoridades portuarias del resto de España.

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [Energía](#Energía_H23)

* [Juez nacional](#Juez_nacional_H24)

* [Impuesto sobre sociedades](#Impuesto_sobre_sociedades_H28)

* [Puertos](#Puertos_H28)

* [Recuperación](#Recuperación_H24)

# CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

## STJUE Tercera 19/1/23 C‑292/21. [Concesión de servicio público](#Concesión_de_servicio_público_H39). Servicio en el ámbito del transporte. Impartición de [cursos](#Cursos_H39) de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del permiso de conducción. Razones imperiosas de interés general. Servicio de interés económico general.

No cabe una adjudicación de los **cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del permiso de conducción** mediante una concesión de servicio público, en la medida en que dicha normativa vaya más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general perseguido, a saber, la mejora de la seguridad vial (*ex art. 15 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior*).

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [Concesión de servicio público](#Concesión_de_servicio_público_H38)

* [Cursos](#Cursos_H38)

# DERECHO SANCIONADOR

## 

## STJUE Segunda 11/5/23 C-155/22. [Transportes](#Transportes_H46) por carretera. Normas comunes relativas a las condiciones de ejercicio de la profesión de transportista por carretera. Normativa nacional que permite trasladar la [responsabilidad penal](#Responsabilidad_penal_H46) por infracciones graves relativas al tiempo de conducción y a los períodos de descanso de los conductores. No consideración de las [sanciones](#Sanciones_H46) impuestas por esas infracciones al apreciar la honorabilidad de la empresa de transporte por carretera.

No cabe que la persona que responde penalmente por las infracciones cometidas en una empresa de transporte por carretera y cuya conducta se toma en consideración para apreciar la honorabilidad de dicha empresa puede designar a una persona como encargado responsable del cumplimiento de las **disposiciones del Derecho de la Unión relativas al tiempo de conducción y a los períodos de descanso de los conductores** y trasladarle, por tanto, la responsabilidad penal por las infracciones de esas disposiciones del Derecho de la Unión, cuando el Derecho nacional no permita tomar en consideración las infracciones imputadas de este modo a dicho encargado a efectos de apreciar si la citada empresa cumple el requisito de honorabilidad (ex artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, en relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.º 1071/2009, en su versión modificada).

# ÍNDICE ANALÍTICO

* [Transportes](#Transportes_H45)

* [Responsabilidad penal](#Responsabilidad_penal_H45)

* [Sanciones](#Sanciones_H45)

# LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

## STJUE Primera 16/6/22 C‑577/20 Reconocimiento de [cualificaciones profesionales](#Cualificaciones_profesionales_H84). [Profesiones reguladas](#Profesión_regulada_H84). Requisitos para la obtención del derecho de acceso al título de psicoterapeuta en un Estado miembro sobre la base de un título en psicoterapia expedido por una universidad establecida en otro Estado miembro. Libertades de circulación y establecimiento. Apreciación de la equivalencia de la formación en cuestión. Cuestionamiento, por el Estado miembro de acogida, del grado de conocimientos y de cualificaciones que un título expedido en otro Estado miembro permite presumir.

Una **solicitud de acceso a una profesión regulada y de autorización para ejercerla** en el Estado miembro de acogida presentada por una persona que posee un título de formación relativo a dicha profesión expedido en un Estado miembro en el que dicha profesión no está regulada y que no cumple el requisito de haberla ejercido durante el período mínimo contemplado en la norma **debe ser apreciada por la autoridad competente** del Estado miembro de acogida a la luz de los artículos 45 TFUE o 49 TFUE (cfm artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE, de 7/9/05 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y los artículos 45 TFUE y 49 TFUE).

La autoridad competente del Estado miembro de acogida que conozca de una solicitud de autorización para ejercer una profesión regulada en ese Estado miembro está obligada a **considerar verídico un** **título expedido por la autoridad de otro Estado miembro** y **no puede, en principio, cuestionar el grado de conocimientos y cualificaciones** que ese título permite presumir que ha adquirido el solicitante. Solo cuando albergue **dudas serias**, basadas en elementos concretos constitutivos de un conjunto de indicios concordantes que induzcan a pensar que el título que invoca el solicitante no refleja el grado de conocimientos y cualificaciones que permite presumir adquirido por este, dicha autoridad puede solicitar a la autoridad emisora que vuelva a examinar, a la luz de esos elementos, la procedencia de la expedición de dicho título y esta última autoridad deberá, en su caso, revocarlo. Entre dichos elementos concretos puede figurar, en su caso, en particular, información transmitida tanto por personas distintas de los organizadores de la formación de que se trate como por las autoridades de otro Estado miembro que actúen en el marco de sus funciones. Cuando **la autoridad emisora haya vuelto a examinar**, a la luz de dichos elementos, la procedencia de la expedición de dicho título, sin revocarlo, la autoridad del Estado miembro de acogida solo podrá **cuestionar la procedencia de su** expedición con carácter excepcional, en el supuesto de que las circunstancias del caso concreto pongan de manifiesto de manera evidente la falta de veracidad del título de que se trate (cfm artículos 45 TFUE y 49 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3).

## STJUE (Sala Tercera) 15/9/22 C‑22/21 Derecho de los [ciudadanos de la Unión](#Ciudadanía_de_la_Unión_H104) y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Concepto de “otro miembro de la familia que viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal”.

El concepto de “**cualquier otro miembro de la familia** que viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal” designa a las personas que mantienen con ese ciudadano una relación de dependencia, basada en vínculos personales estrechos y estables, creados en el seno de una misma unidad familiar, en el marco de una convivencia doméstica que va más allá de una mera cohabitación temporal, determinada por razones de simple conveniencia (art. 3, aptdo. 2, pfo. primero, letra a), de la Directiva 2004/38/CE de 29/4/04, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros).

## STJUE Cuarta 2/3/23 C270/21. Libre circulación de los [trabajadores](#Trabajadores2_H84). Reconocimiento de [cualificaciones profesionales](#Cualificaciones_profesionales_H100) en un Estado Miembro. Derecho a ejercer la profesión de [maestro](#Maestros_H88) de educación infantil. [Profesión regulada](#Profesión_regulada_H100). Derecho de acceso a la profesión sobre la base de un título emitido en el Estado miembro de origen. Cualificación profesional obtenida en un tercer país.

No se considera una «**profesión regulada**» aquella respecto de la cual la normativa nacional exige requisitos de aptitud para el acceso y ejercicio, pero concede a los empleadores discrecionalidad para apreciar el cumplimiento de esos requisitos (ex artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013).

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/36, en su versión modificada por la Directiva 2013/55 no es aplicable en el supuesto de que el **título de formación presentado al Estado miembro de acogida** **se haya obtenido en el territorio de otro Estado miembro en una época en la que este último no existía como Estado independiente**, sino como república socialista soviética, y ese título de formación haya sido equiparado por dicho Estado miembro a un título de formación expedido en él en un momento posterior a la recuperación de su independencia. Tal título de formación debe considerarse obtenido en un Estado miembro y no en un tercer país.

## Conclusiones AG 9/3/23 C680/21. Libre circulación de los [trabajadores](#Trabajadores_H100). Reglamentos de la UEFA y de las federaciones nacionales de [fútbol](#Fútbol_H88) asociadas. Jugadores formados localmente.

Las **actividades deportivas** que forman parte de la vida económica están comprendidas en el ámbito de las libertades fundamentales del Tratado, lo que implica que **los futbolistas profesionales que ejercen una actividad económica deben considerarse «trabajadores»** a efectos del artículo 45 TFUE.

El artículo 45 TFUE se aplica a entidades privadas como la UEFA y la URBSFA que regulan colectivamente el trabajo por cuenta ajena.

Una **restricción a la libre circulación de los trabajadores** solo puede justificarse si, en primer lugar, se basa en uno de los motivos de justificación enumerados en el artículo 45 TFUE, apartado 3, o en una razón imperiosa de interés general y, en segundo lugar, respeta el principio de proporcionalidad, lo que implica que sea adecuada para garantizar, de forma congruente y sistemática, la realización del objetivo perseguido y que no vaya más allá de lo necesario para lograrlo.

Interpretación sobre el art. 165 del TFUE: Identifica un motivo que justifica una restricción del artículo 45 TFUE, la denominada razón imperiosa de interés general, e indica qué es aceptable en la Unión a la hora de emplear el criterio de proporcionalidad.

Es legítimo el objetivo consistente en **alentar la contratación y la formación de los nuevos jugadores**. Lo mismo ocurre con el objetivo de **mantener un equilibrio entre los clubes**, preservando cierta igualdad de oportunidades y la incertidumbre de los resultados.

Las **normas deportivas** tienen un efecto económico, pero sin ciertas normas fundamentales no existiría deporte. Los **mercados específicos del deporte de competición** se basan en la existencia de competidores. La falta de **restricciones** podría dar lugar potencialmente a una situación en la que un club, con capacidad de fichar a todos los jugadores, estaría en condiciones en las que, de facto, no podría ya ser derrotado por otros clubes. Las disposiciones controvertidas no son congruentes y, en consecuencia, no son adecuadas para alcanzar los objetivos de formar jugadores jóvenes y mejorar el equilibrio competitivo entre los equipos.

No hay motivos para apartarse de la jurisprudencia ordinaria y ofrecer a la UEFA y la URBSFA un margen de apreciación más amplio que el que correspondería a un Estado miembro para justificar una restricción al artículo 45 TFUE.

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de normas relativas a los **jugadores formados localmente**, como las adoptadas por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la *Union royale belge des sociétés de football association* (URBSFA), en virtud de las cuales, para participar en las **competiciones** pertinentes, los clubes deben incluir en una lista, de un máximo de veinticinco jugadores, al menos ocho **jugadores formados localmente**, en la medida en que dichos jugadores formados localmente pueden proceder de otro club de la federación nacional de fútbol de que se trate.

## 

## STJUE Gran Sala 5/12/23 C‑128/22. Medidas que limitan la libre circulación de los ciudadanos de la Unión por razones de [salud pública](#Saud_pública_H88). Medidas de alcance general. Normativa nacional que establece las [prohibiciones](#Prohibiciones_H100) de salir del territorio nacional para realizar viajes no esenciales a Estados miembros clasificados como zona de alto riesgo en el contexto de la pandemia de [COVID](#COVID_H88)-19 y la obligación para todos los viajeros que entren en el territorio nacional desde alguno de esos Estados miembros de someterse a [pruebas de detección](#COVID_Pruebas_de_detección_H88) y cumplir una [cuarentena](#COVID_Cuarentena_H88). Código de [fronteras](#Fronteras_H88) Schengen. Ejercicio de las competencias de policía en materia de salud pública. Equivalencia con el ejercicio de inspecciones fronterizas. Posibilidad de restablecer controles en las fronteras interiores en el contexto de la pandemia de COVID-19. Controles realizados en un Estado miembro en el marco de medidas de prohibición del cruce de las fronteras para realizar viajes no esenciales desde o hacia Estados del espacio Schengen clasificados como zona de alto riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Los artículos 27 y 29 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, en relación con los artículos 4 y 5 de esta, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de alcance general de un Estado miembro que, por razones de salud pública relacionadas con la lucha contra la pandemia de COVID-19, por un lado, **prohíbe a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias, independientemente de su nacionalidad, realizar viajes no esenciales desde ese Estado miembro a otros Estados miembros clasificados por él como zonas de alto riesgo en consideración a medidas sanitarias de limitación o a la situación epidemiológica existente en esos otros Estados miembros** y, por otro lado, **impone a los ciudadanos de la Unión sin la nacionalidad de dicho Estado miembro la obligación de someterse a pruebas de detección y de cumplir una cuarentena a su entrada en el territorio del referido Estado miembro desde cualquiera de esos otros Estados miembros**, siempre y cuando esa normativa nacional respete todos los requisitos y garantías que se prescriben en los artículos 30 a 32 de dicha Directiva, los derechos y los principios fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el principio de prohibición de las discriminaciones, y el principio de proporcionalidad.

Los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro que, por **razones de salud pública relacionadas con la lucha contra la pandemia de COVID-19**, **prohíbe, bajo el control de las autoridades competentes y so pena de sanción, el cruce de las fronteras interiores de ese Estado miembro para realizar viajes no esenciales hacia o desde Estados del espacio Schengen clasificados como zona de alto riesgo**, a condición de que esas medidas de control formen parte del ejercicio de **competencias de policía**, que no debe tener un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas, en el sentido del artículo 23, letra a), de este Código, o de que, en caso de que dichas medidas constituyan **controles en las fronteras interiores**, dicho Estado miembro haya cumplido los requisitos que los artículos 25 a 28 de dicho Código prescriben para el restablecimiento temporal de tales controles, entendiéndose que la **amenaza provocada por tal pandemia** se corresponde con una **amenaza grave para el orden público o la seguridad interior**, en el sentido del artículo 25, apartado 1, del referido Código.

## STJUE Segunda 22/2/24 C-283/21. [Seguridad social](#Seguridad_social_H88) de los trabajadores [inmigrantes](#Inmigrantes_H88). Pensión por incapacidad laboral absoluta. Consideración de los períodos de educación de los hijos cubiertos en otro Estado miembro. Libre circulación de los ciudadanos. Vínculo suficiente entre estos períodos de educación y los períodos de seguro cubiertos en el Estado miembro deudor de la pensión.

El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, cuando la persona de que se trate no cumple el requisito del **ejercicio de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia** que impone el artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, para obtener, a efectos de la concesión de una **pensión por incapacidad laboral absoluta**, el cómputo, por el Estado miembro al que corresponde abonar dicha pensión, de los **períodos de educación de los hijos que hubiera cubierto en otro Estado miembro**, sino que ha cubierto exclusivamente, en concepto de períodos de formación o de actividad profesional, períodos de seguro en el primer Estado miembro, tanto antes como después de esos períodos de educación, **ese Estado miembro está obligado a computarlos aun cuando dicha persona no haya cotizado en tal Estado miembro ni antes ni inmediatamente después de los citados períodos de educación**.

## STJUE Gran Sala 9/5/24 C‑75/22 [Trabajadores](#Trabajadores_H102). [Cualificaciones profesionales](#Cualificaciones_profesionales_H102). [Profesión regulada](#Profesión_regulada_H102). [Arquitectos](#Profesión_regulada_Arquitectos_H102). [Veterinarios](#Profesión_regulada_Veterinarios_H102). Reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Obligación de los Estados miembros de velar por que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida determinen el estatuto de las personas que realizan un período de prácticas o se preparan para una prueba de aptitud. Obligación de los Estados miembros de garantizar, en particular, a los veterinarios y a los arquitectos la posibilidad de realizar prestaciones, en el marco de la libre prestación de servicios, al amparo del título profesional del Estado miembro de acogida. Obligación de los Estados miembros de velar por que los titulares de un título profesional de formación universitaria o de un nivel reconocido equivalente en farmacia que cumplan las condiciones indicadas en el artículo 44 de la referida Directiva sean habilitados al menos para el acceso a las actividades mencionadas en el artículo 45, apartado 2, de la citada Directiva, sin perjuicio, en su caso, de la exigencia de una experiencia profesional complementaria. Obligación de los Estados miembros de velar por que la autoridad competente del Estado miembro de acogida disponga de un plazo de un mes para acusar recibo de la solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales y para informar, en su caso, al solicitante de la falta de cualquier documento.

Se refiere una declaración de incumplimiento por parte de la República Checa, declarándose que tiene la obligación de determinar el estatuto de las personas que realizan un período de prácticas o desean prepararse para una prueba de aptitud; adoptar las disposiciones necesarias para que los veterinarios y los arquitectos tengan la posibilidad de realizar prestaciones, en el marco de la libre prestación de servicios, al amparo del título profesional del Estado miembro de acogida; y adoptar las disposiciones necesarias para que la autoridad competente del Estado miembro de acogida disponga de un plazo de un mes para acusar recibo de la solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales y para informar, en su caso, al solicitante de la falta de cualquier documento.

## STJUE Décima 13/6/24 C‑62/23 [Prohibiciones](#Prohibiciones_H102) del derecho de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Conducta que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Denegación de la expedición de una tarjeta de residencia temporal de familiar de un ciudadano de la Unión a causa de antecedentes policiales. Informe policial desfavorable debido a una detención.

El artículo 27, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de a Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que **una autoridad nacional competente tenga en cuenta una detención de la que ha sido objeto el interesado a fin de apreciar si el comportamiento de esa persona constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad**, siempre que, en el marco de la **apreciación global de ese comportamiento**, se tomen en consideración, expresa y detalladamente, los **hechos en los que se basa dicha detención y las eventuales consecuencias judiciales de esta**.

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [COVID](#COVID_H85)
* [COVID – cuarentena](#COVID_Cuarentena_H85)

* [COVID - pruebas de detección](#COVID_Pruebas_de_detección_H85)

* [Ciudadanía de la Unión](#Ciudadanía_de_la_Unión_H98)

* [Cualificaciones profesionales](#Cualificaciones_profesionales_H97)

* [Fronteras](#Fronteras_H85)

* [Fútbol](#Futbol_H84)

* [Inmigrantes](#Inmigrantes_H86)

* [Maestros](#Maestros_H84)

* [Profesión regulada](#Profesiones_reguladas_H97)

* [Profesión regulada – Arquitectos](#Profesión_regulada_Arquitectos_H100)

* [Profesión regulada - Veterinarios](#Profesión_regulada_Veterinarios_H100)

* [Prohibiciones](#Prohibiones_H85)

* [Salud pública](#Salud_pública_H85)

* [Seguridad social](#Seguridad_social_H86)

* [Trabajadores](#Trabajadores_H84)

# LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO

## STJUE Gran Sala 7/9/22 C‑391/20 Libertad de establecimiento. Organización del sistema educativo. Centros de [educación](#Educación_H120) superior. Obligación de impartir los programas de estudios en la [lengua oficial](#Educación_Idioma_H120) del Estado. Identidad nacional. Defensa y promoción de la lengua oficial. [Principio de proporcionalidad](#Principio_de_proporcionalidad_H89).

La normativa de un Estado miembro puede imponer, en principio, a los centros de educación superior la obligación de impartir la enseñanza exclusivamente en la lengua oficial del Estado, siempre que tal normativa esté justificada por motivos relacionados con la protección de la identidad nacional del Estado, es decir, que sea necesaria y proporcionada a la protección del objetivo legítimamente perseguido (cfm con artículo 49 TFUE).

## STJUE 2/2/23 C-372/21. Estatuto de las Iglesias y asociaciones o [comunidades religiosas](#Comunidades_religiosas_H91) en los Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión. Libertad de establecimiento. [Restricciones](#Restricciones_H90). Justificación. [Principio de proporcionalidad](#Principio_de_proporcionalidad_H91). [Subvenciones](#Subvenciones_H91) para un centro docente privado. Solicitud presentada por una asociación religiosa establecida en otro Estado miembro. Centro reconocido por dicha asociación como colegio confesional.

No cabe sustraer del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión una situación en la que una **Iglesia, una asociación o una comunidad religiosa que dispone del estatuto de persona jurídica de Derecho público en un Estado miembro** y que, en otro Estado miembro, reconoce y apoya, como colegio confesional, un **centro docente privado** solicita para este la concesión de una **subvención** que está reservada a las Iglesias, asociaciones y comunidades religiosas reconocidas con arreglo al Derecho de ese otro Estado miembro (*ex artículo 17 TFUE, apartado 1*).

Cabe que una normativa nacional supedite la concesión de **subvenciones públicas destinadas a los centros docentes privados reconocidos como colegios confesionales** al requisito de que la Iglesia o la asociación religiosa que presenta la solicitud de subvención para tal centro esté reconocida conforme al Derecho del Estado miembro en cuestión, incluso cuando dicha Iglesia o asociación religiosa esté reconocida con arreglo al Derecho de su Estado miembro de origen (*ex artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 17 TFUE, apartado 1*).

## 

## STJUE Primera 8/6/23 C-50/21. Servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor ([VTC](#VTC_H91)). Régimen de autorización que implica el otorgamiento, además de una autorización que permite prestar servicios urbanos e interurbanos de transporte en todo el territorio nacional, de una segunda licencia de explotación para poder prestar servicios urbanos de transporte en un ámbito metropolitano. Limitación del número de licencias de servicios de VTC a una por cada treinta licencias de taxi.

Cabe una normativa, aplicable a una conurbación, que establece, por un lado, que para ejercer la actividad de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor en esa conurbación se exige una **autorización específica, que se añade a la autorización nacional** requerida para la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor urbanos e interurbanos, y, por otro lado, que el **número de licencias de tales servicios se limita a una por cada treinta licencias de servicios de taxi** otorgadas para dicha conurbación, siempre que estas medidas no impliquen comprometer fondos estatales en el sentido de la citada disposición (ex artículo 107 TFUE, apartado 1).

Cabe una normativa, aplicable en una conurbación, que establece que para ejercer la actividad de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor en esa conurbación se exige una autorización específica, que se añade a la autorización nacional requerida para la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor urbanos e interurbanos, cuando **esa autorización específica se base en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyen cualquier arbitrariedad y no se solapan con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que responden a necesidades particulares de esa conurbación** (ex artículo 49 TFUE)

**No cabe** una normativa, aplicable en una conurbación, que establece una **limitación del número de licencias** de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor a una por cada treinta licencias de servicios de taxi otorgadas para dicha conurbación, cuando **no se haya acreditado ni que esa medida sea apropiada para garantizar, de forma congruente y sistemática, la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de tal conurbación, así como de protección de su medio ambiente, ni que la citada medida no va más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos** (ex artículo 49 TFUE).

## 

## STJUE Séptima 2/3/23 C695/21. [Restricciones](#Restricciones2_H104) a la libre prestación de servicios. [Juegos de azar](#Juegos_de_azar_H91). Normativa de un Estado miembro que establece una prohibición general de que los establecimientos de juegos de azar hagan publicidad. Excepción de pleno Derecho de esta prohibición para los establecimientos que dispongan de una licencia de explotación expedida por las autoridades de ese Estado miembro. Imposibilidad de excepción para los establecimientos situados en otro Estado miembro.

No cabe una legislación de un Estado miembro que concede a los **operadores de un número limitado y controlado de establecimientos de juegos de azar** situados en el territorio de ese Estado miembro una excepción de pleno Derecho a la **prohibición de publicidad** generalmente aplicable a tales establecimientos, sin prever la posibilidad de que los operadores de establecimientos de juegos de azar situados en otro Estado miembro obtengan una excepción a esos mismos efectos (ex artículo 56 TFUE, párrafo primero).

## STJUE Tercera 25/4/24 C-276/22 Sociedad establecida en un Estado miembro pero que ejerce sus actividades en otro Estado miembro. Funcionamiento y gestión de la sociedad. Normativa nacional que prevé la aplicación de la ley del Estado miembro en el que una sociedad ejerce sus actividades. [Restricción](#Restricciones_H107) a la libertad de establecimiento. Justificación. Protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores. Lucha contra las [prácticas abusivas](#Prácticas_abusivas_H107) y los montajes artificiales.

Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que prevé, con carácter general, la **aplicación de su Derecho nacional a los actos de gestión de una sociedad establecida en otro Estado miembro pero que ejerce la parte principal de sus actividades en el primer Estado miembro**.

## STJUE Segunda 30/5/24 C‑662/22 y C‑667/22 Libre prestación de servicios. Prestadores de servicios de la sociedad de la información. Obligación de inscribirse en un registro de operadores de comunicaciones. Obligación de facilitar información sobre la estructura y la organización. Obligación de abonar una contribución económica. Principio de control en el Estado miembro de origen. Excepciones. Concepto de “medidas tomadas en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información”. [Airbnb](#Airbnb_H107).

El artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que se opone a unas medidas adoptadas por un Estado miembro, con el objetivo declarado de garantizar la aplicación adecuada y efectiva del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el **fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea**, en virtud de las cuales, so pena de sanciones, **los proveedores de servicios de intermediación en línea establecidos en otro Estado miembro están obligados, para prestar sus servicios en el primer Estado miembro, a inscribirse en un registro llevado por una autoridad de dicho Estado miembro, a comunicar a esa autoridad diversa información detallada sobre su organización y a abonarle una contribución económica**.

## STJUE Segunda 30/5/24 C‑664/22 y C‑666/22 Libre prestación de servicios. Prestadores de servicios de la sociedad de la información. Obligación de inscribirse en un registro de operadores de comunicaciones. Obligación de facilitar información sobre la estructura y la organización. Obligación de abonar una contribución económica. Principio de control en el Estado miembro de origen. Excepciones. Concepto de “medidas tomadas en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información”. [Google](#Google_H107).

El artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que se opone a unas medidas adoptadas por un Estado miembro, con el objetivo declarado de garantizar la aplicación adecuada y efectiva del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el **fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea**, en virtud de las cuales, so pena de sanciones, **los proveedores de servicios de intermediación en línea y de motores de búsqueda en línea establecidos en otro Estado miembro están obligados, para prestar sus servicios en el primer Estado miembro, a inscribirse en un registro llevado por una autoridad de dicho Estado miembro, a comunicar a esa autoridad diversa información detallada sobre su organización y a abonarle una contribución económica**.

## STJUE Segunda 30/5/24 C‑664/22 y C‑666/22 Libre prestación de servicios. Prestadores de servicios de la sociedad de la información. Obligación de inscribirse en un registro de operadores de comunicaciones. Obligación de facilitar información sobre la estructura y la organización. Obligación de abonar una contribución económica. Principio de control en el Estado miembro de origen. Excepciones. Concepto de “medidas tomadas en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información”. [Amazon](#Amazon_107).

El artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que se opone a unas medidas adoptadas por un Estado miembro, con el objetivo declarado de garantizar la aplicación adecuada y efectiva del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el **fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea**, en virtud de las cuales, so pena de sanciones, **los proveedores de servicios de intermediación en línea establecidos en otro Estado miembro están obligados, para prestar sus servicios en el primer Estado miembro, a remitir periódicamente a una autoridad de ese Estado miembro un documento relativo a su situación económica, en el que debe detallarse abundante información relativa, en particular, a los ingresos del proveedor**.

## STJUE Tercera 11/7/24 C‑598/22 Artículo 49 TFUE. Concesiones del dominio público marítimo-terrestre. Extinción y renovación. Normativa nacional que prevé la cesión al Estado a título gratuito de las obras no desmontables realizadas en el dominio público. Restricción. Inexistencia.

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional que establece que, al **extinguirse una concesión de ocupación del dominio público** y a menos que el acto de concesión establezca otra cosa, el concesionario está obligado a ceder inmediatamente, de forma gratuita y sin indemnización, las **obras no desmontables que haya realizado sobre el área concedida**, incluso en caso de renovación de la concesión.

**ÍNDICE ANALITICO**

* [Airbnb](#Airbnb_H104)

* [Amazon](#Amazon_H105)
* [Comunidades religiosas](#Comunidades_religiosas_H89)

* [Educación](#Educación_H116)

* [Educación - Idioma](#Educación__Idioma_H116)

* [Google](#Google_H105)

* [Juegos de azar](#Juegos_de_azar_H90)

* [Prácticas abusivas](#Prácticas_abusivas_H104)

* [Principio de proporcionalidad](#Principio_de_proporcionalidad_H116)

* [Restricciones](#Restricciones_H89)

* [Subvenciones](#Subvenciones_H89)

* [VTC](#VTC_H89)

# LIBERTAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

## STJUE Quinta 20/6/24 C‑540/22 Desplazamiento de nacionales de terceros países por una empresa de un Estado miembro para realizar trabajos en otro Estado miembro. Duración superior a 90 días dentro de un período de 180 días. Obligación de los trabajadores desplazados nacionales de terceros países de ser titulares de un [permiso de residencia](#Permiso_de_residencia_H109) en el Estado miembro de acogida en caso de prestación de más de tres meses. Limitación del período de validez de los permisos de residencia expedidos. Cuantía de las tasas correspondientes a la solicitud de un permiso de residencia. Restricción a la libre prestación de servicios. Razones imperiosas de interés general. Proporcionalidad.

Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE deben interpretarse en el sentido de que a los **trabajadores nacionales de terceros países desplazados a un Estado miembro por una empresa prestadora de servicios establecida en otro Estado miembro no debe automáticamente reconocérseles un «derecho de residencia derivado», ya sea en el Estado miembro en el que están empleados o en aquel al que han sido desplazados**.

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que prevé que, en el supuesto de que **una empresa establecida en otro Estado miembro realice en el primer Estado miembro una prestación de servicios cuya duración sea superior a tres meses, dicha empresa tiene la obligación de obtener en el Estado miembro de acogida un permiso de residencia para cada trabajador nacional de un tercer país que pretende desplazar a ese Estado miembro, y que, para obtener tal permiso, la referida empresa ha de notificar previamente la prestación de servicios para cuya realización esos trabajadores deben ser desplazados y comunicar a las autoridades del Estado miembro de acogida los permisos de residencia de que disponen estos en el Estado miembro en el que está establecida, así como sus contratos de trabajo**.

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, en primer lugar, **la validez del permiso de residencia que puede concederse a un trabajador nacional de un tercer país desplazado a ese Estado miembro no puede, en ningún caso, exceder de una duración determinada por la normativa nacional controvertida, que puede ser, por tanto, inferior a la necesaria para realizar la prestación para la que dicho trabajador ha sido desplazado**, en segundo lugar, **el período de validez de ese permiso de residencia se limita al período de validez del permiso de trabajo y de residencia del que dispone el interesado en el Estado miembro en el que está establecida la empresa prestadora de servicios** y, en tercer lugar, **la expedición del referido permiso de residencia requiere el pago de tasas por una cuantía superior a la de las tasas adeudadas por la expedición de un certificado de residencia legal a un ciudadano de la Unión, siempre que, para empezar, el período inicial de validez del permiso no sea manifiestamente demasiado corto para responder a las necesidades de la mayoría de los prestadores de servicios**, a continuación, sea posible **obtener la renovación del permiso de residencia sin tener que cumplimentar formalidades excesivas** y, por último, **el mencionado importe corresponda aproximadamente al coste administrativo que genera la tramitación de una solicitud de obtención de un permiso de ese tipo**.

## STJUE Primera 4/10/24 C-242/23 Libre prestación de servicios. Restricciones a las actividades multidisciplinares. [Profesión regulada](#Profesión_regulada_H42). Normativa nacional que establece, con carácter general, una incompatibilidad entre el ejercicio conjunto de la actividad de intermediación inmobiliaria y la de administración de comunidades de propietarios de inmuebles. Requisitos de independencia e imparcialidad. [Proporcionalidad](#Proporcionalidad_H42) de la restricción. Consecuencias de la conclusión de un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra un Estado miembro.

Al prohibir de manera general el **ejercicio conjunto de las actividades de intermediación inmobiliaria y de administración de comunidades propietarios**, la normativa nacional controvertida somete **la actividad de intermediación, que es una profesión regulada en Italia**, a exigencias como las previstas en el artículo 25, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2006/123.

**Para garantizar la protección de los consumidores, los Estados miembros pueden adoptar medidas dirigidas a garantizar la independencia e imparcialidad de las profesiones reguladas**, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, párrafo segundo, letra a), de la Directiva 2006/123.

Dado que un intermediario inmobiliario debe ser un tercero respecto de las partes de una transacción inmobiliaria, resulta que la prohibición de ejercer conjuntamente las actividades de intermediación inmobiliaria y de administración de comunidades de propietarios, en la medida en que tiene por objeto prevenir el **riesgo de conflicto de intereses**, puede considerarse, en principio, adecuada para garantizar la independencia y la imparcialidad de la profesión regulada de que se trata.

No obstante, parece que una prohibición tan general va más allá de lo necesario y proporcionado para alcanzar este objetivo.

Si bien no puede descartarse la posibilidad de que surja un conflicto de intereses, en particular cuando las actividades de intermediación inmobiliaria y de administración de comunidades propietarios se ejercen respecto de un mismo bien o de bienes comparables, ese riesgo no se materializará necesariamente en todas las circunstancias, de modo que no puede presumirse la existencia de tal conflicto de intereses. Además, medidas menos lesivas para la libre prestación de servicios que una prohibición general del ejercicio conjunto de ambas actividades, como una prohibición limitada a los casos en los que esté implicado el mismo bien inmueble, u obligaciones específicas de transparencia e información sobre dicho ejercicio conjunto, unidas a un control a posteriori por parte de las cámaras profesionales competentes, también permitirían garantizar la independencia e imparcialidad de la profesión regulada de que se trata.

Las dificultades de orden práctico, relativas a la imposibilidad de comprobar la inexistencia de un conflicto de intereses en cada transacción en un eventual ejercicio conjunto de las actividades de intermediación inmobiliaria y de administrador de la comunidad de propietarios de un mismo bien inmueble, no son insuperables. En efecto, las escrituras de compraventa pueden incluir, por ejemplo, declaraciones expresas que indiquen que el agente inmobiliario, que actúa como intermediario, no ejerce al mismo tiempo la función de administrador de la comunidad de propietarios de la que forma parte el inmueble adquirido.

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [Permiso de residencia](#Permiso_de_residencia_H108)

* [Profesión regulada](#Profesión_regulada_H41)

* [Proporcionalidad](#Proporcionalidad_H41)

**MEDICAMENTOS**

## STJUE Sala Segunda 29/2/24 C-606/21 Medicamentos para uso humano. [Venta a distancia](#Venta_a_distancia_H94) al público de medicamentos. Medicamentos de uso humano no sujetos a receta médica. Personas autorizadas o facultadas para vender a distancia medicamentos al público. Facultad de los Estados miembros de imponer condiciones justificadas por razón de protección de la salud pública en relación con la distribución al por menor en su territorio de medicamentos vendidos en línea. Servicios de la sociedad de la información. Servicio de puesta en contacto de farmacéuticos y clientes para la venta en línea de medicamentos.

El artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, deben interpretarse en el sentido de que un **servicio prestado en un sitio de Internet consistente en poner en contacto a farmacéuticos y clientes para la venta, desde los sitios de Internet de las oficinas de farmacia que se han suscrito a dicho servicio, de medicamentos no sujetos a receta médica** está comprendido en el concepto de **«servicio de la sociedad de la información»**, en el sentido de dichas disposiciones.

El artículo 85 quater de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros pueden, sobre la base de esta disposición, **prohibir la prestación de un servicio consistente en poner en contacto, a través de un sitio de Internet, a farmacéuticos y clientes para la venta, desde los sitios de Internet de las oficinas de farmacia que se han suscrito a dicho servicio, de medicamentos no sujetos a receta médica** si se demuestra, habida cuenta de las características de ese servicio, que el prestador de este procede por sí mismo a la venta de tales medicamentos **sin estar autorizado o facultado para ello** por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio está establecido.

## STJUE 5ª 21/9/23 (C‑47/22) Productos farmacéuticos y [cosméticos](#Cosméticos_H94). [Medicamentos](#Medicamentos_H94) para uso humano. Directrices sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano (PCD). Cadena de distribución de productos farmacéuticos. Titular de una autorización de distribución al por mayor que adquiere medicamentos de personas que están autorizadas para dispensar medicamentos al público, pero que no son a su vez ni titulares de una autorización de distribución ni están dispensadas de la obligación de obtener tal autorización. Conceptos de “personal competente en número suficiente” y de “persona responsable”. Suspensión o revocación de la autorización de distribución al por mayor.

El artículo 80, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, debe interpretarse en el sentido de que una **persona titular de una autorización de distribución al por mayor de medicamentos** no puede **adquirir medicamentos** de otras personas que, con arreglo a la normativa nacional, están autorizadas o facultadas para dispensar medicamentos al público, pero que no son a su vez titulares de dicha autorización de distribución ni están dispensadas de la obligación de obtener tal autorización con arreglo al artículo 77, apartado 3, de la Directiva 2001/83, en su versión modificada, incluso cuando la adquisición se realice únicamente a pequeña escala, o cuando los medicamentos así adquiridos se destinen únicamente a ser revendidos a personas autorizadas o habilitadas para dispensar medicamentos al público o a personas que a su vez son titulares de una autorización de distribución al por mayor.

El artículo 79, letra b), de la Directiva 2001/83, en su versión modificada por la Directiva 2011/62, debe interpretarse en el sentido de que los **requisitos en materia de personal** previstos por dicha disposición se cumplen cuando, durante una **inspección**, la **persona designada como responsable por el mayorista** no está presente en el establecimiento, pero puede ser localizada por teléfono, y el personal presente en el establecimiento está en condiciones de facilitar directamente al servicio de inspección la información solicitada por este relativa a los procedimientos incluidos en su ámbito de competencia. Para **apreciar si un mayorista dispone de personal competente en número suficiente**, es preciso tomar en consideración las actividades que, en su caso, dicho mayorista haya subcontratado y los efectivos que intervienen en tales actividades.

El artículo 77, apartado 6, de la Directiva 2001/83, en su versión modificada por la Directiva 2011/62, debe interpretarse en el sentido de que la **autoridad competente de un Estado miembro a la que incumbe decidir si se ha de suspender o revocar la autorización de distribución de medicamentos al por mayor a raíz de los incumplimientos de las obligaciones** que figuran en los artículos 79 y 80 de la Directiva 2001/83, en su versión modificada, basa su examen en la **naturaleza y la gravedad de tales incumplimientos**, prestando al mismo tiempo una atención particular al elevado nivel de seguridad en materia de suministro de medicamentos que dicha Directiva consagra. Para que la medida que eventualmente se adopte sea proporcionada, dicha autoridad tendrá en cuenta, en su caso, el hecho de que se hayan subsanado dichas deficiencias lo más rápidamente posible y de que las deficiencias fueran repetitivas o sistemáticas.

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [Cosméticos](#Cosméticos_H93)

* [Medicamentos](#Medicamentos_H93)

* [Venta a distancia](#venta_a_distancia_H93)

# MERCADOS REGULADOS

## STJUE Quinta 30/3/23 C5/22. Mercado interior de la [electricidad](#Electricidad2_H106). Obligaciones y competencias de la [autoridad reguladora](#Autoridad_reguladora_H107) nacional. Protección de los [consumidores](#Consumidores_H107). Gastos de gestión administrativa. Competencia de la autoridad reguladora nacional para ordenar el reembolso de los importes pagados por los clientes finales con arreglo a cláusulas contractuales cuya utilización ha sido sancionada por esa autoridad.

Conformidad de que un Estado miembro asigne a la **autoridad reguladora** nacional la competencia para efectuar **requerimientos a las empresas eléctricas** a efectos de que reembolsen a sus clientes finales la cantidad correspondiente a la contraprestación pagada por estos en concepto de «gastos de gestión administrativa» con arreglo a una cláusula **contractual considerada ilegal por dicha autoridad**, incluidos los casos en que el requerimiento de reembolso no se basa en razones de calidad del servicio en cuestión prestado por las referidas empresas, sino en el incumplimiento de obligaciones de transparencia tarifaria (*ex artículo 37, apartados 1, letras i) y n), y 4, letra d), de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, así como el anexo I de la Directiva 2009/72*).

## STJUE Quinta 20/4/23 C-580/21. Fomento de la [energía](#Energía_H107) procedente de fuentes de energía renovables. Acceso a las redes de transporte y de distribución. Acceso prioritario conferido a la [electricidad](#Electricidad_H107) producida a partir de fuentes de energía [renovables](#Renovables_H107). Producción a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales.

La **prioridad de acceso a la red eléctrica** de que disfrutan las **instalaciones de generación** **de** **electricidad que utilizan fuentes de energía renovables** ha de concederse no solo a las instalaciones que generan electricidad exclusivamente a partir de fuentes de energía renovables, sino también a aquellas que la generan a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales (*ex artículo 16, apartado 2, letra c), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE*).

Una **instalación que genera electricidad a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales** disfruta de **prioridad de acceso** a la red únicamente para la parte de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. Corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades de aplicación de esta prioridad de acceso, fijando criterios transparentes y no discriminatorios que, sin dejar de tener en cuenta los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad de la red (*ex artículo 16, apartado 2, letra c), de la Directiva 2009/28*).

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [Autoridad reguladora](#Autoridad_reguladora_H106)

* [Consumidores](#Consumidores_H106)

* [Electricidad](#Electricidad_H106)

* [Energía](#Energía_H106)

* [Renovables](#Renovables_H106)

# NACIONALIDAD A LA UNIÓN EUROPEA

## Conclusiones 26/1/23 C 689-21. [Ciudadanía de la Unión](#Ciudadanía_de_la_Unión2_H108). Nacionalidad de un Estado miembro y de un Estado tercero. [Pérdida](#Ciudadanía_de_la_Unión_pérdida2_H108) automática de la nacionalidad del Estado miembro al cumplir veintidós años por falta de vínculo efectivo si no se solicita su conservación antes de esa fecha. Pérdida de la ciudadanía de la Unión. Examen a la luz del [principio de proporcionalidad](#Principio_de_proporcionalidad2_H108) de las consecuencias de la pérdida desde el punto de vista del Derecho de la Unión.

*El art. 20 TFUE, en relación con el artículo 7 de la CDFUE* debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé, con sujeción a determinados requisitos, la **pérdida automática de la nacionalidad de dicho Estado miembro al cumplir los veintidós años de edad por falta de vínculo efectivo**, si no se ha solicitado su conservación antes de esa edad, pérdida que implica, en el caso de las **personas que no posean asimismo la nacionalidad de otro Estado miembro**, la pérdida de la ciudadanía de la Unión y de los derechos vinculados a la misma, sin que, cuando la solicitud se presenta después de cumplidos los veintidós años, se lleve a cabo un examen individual, a la luz del principio de proporcionalidad, de las consecuencias de tal pérdida para su situación desde el punto de vista del Derecho de la Unión, con la posibilidad de **recuperar ex tunc la nacionalidad** por parte de las personas afectadas cuando solicitan un documento de viaje o cualquier otro documento que acredite su nacionalidad.

## STJUE Gran Sala 5/9/23 C-689/21. [Ciudadanía de la Unión](#Ciudadanía_de_la_Unión_H110) Europea. Ciudadano que tiene la nacionalidad de un Estado miembro y la nacionalidad de un tercer país. [Pérdida](#Ciudadanía_de_la_Unión_Pérdida_H110) automática de la nacionalidad del Estado miembro a la edad de veintidós años por ausencia de vínculo de conexión efectivo con ese Estado miembro, a falta de solicitud de conservación de la nacionalidad antes de la fecha en que se cumple dicha edad. Pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión. Examen del [principio de proporcionalidad](#Principio_de_proporcionalidad_H110) de las consecuencias de esta pérdida a la luz del Derecho de la Unión.

El artículo 20 TFUE, en relación con el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no se opone a la normativa de un Estado miembro según la cual los **nacionales de ese Estado que hayan nacido fuera de su territorio y que no hayan residido nunca en él ni realizado estancias en él en condiciones que demuestren un vínculo de conexión efectivo con ese Estado miembro pierden automáticamente la nacionalidad de este a la edad de veintidós años**, lo que supone, para las **personas que no sean también nacionales de otro Estado miembro**, la **pérdida de su estatuto de ciudadano de la Unión Europea y de los derechos correspondientes**, siempre que se permita a las personas interesadas presentar, en un plazo razonable, una **solicitud de conservación o de recuperación de la nacionalidad** que permita a las autoridades competentes examinar la proporcionalidad de las consecuencias de la pérdida de tal nacionalidad desde el punto de vista del Derecho de la Unión y, en su caso, conceder la conservación o la recuperación *ex tunc* de la referida nacionalidad. Tal **plazo** debe extenderse, durante un período razonable, más allá de la fecha en que la persona interesada alcanza esa edad y solo puede empezar a correr si **dichas autoridades han informado** debidamente a esa persona de la pérdida de su nacionalidad o de la inminencia de esta pérdida, así como de su derecho a solicitar, en ese plazo, la conservación o la recuperación de esa nacionalidad. De no ser así, dichas autoridades deben estar en condiciones de efectuar tal examen, por vía incidental, con motivo de una solicitud de la persona interesada de un documento de viaje o de cualquier otro documento que acredite su nacionalidad.

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [Ciudadanía de la Unión](#Ciudadanía_de_la_Unión_H108)

* [Ciudadanía de la Unión – Pérdida](#Ciudadanía_de_la_Unión_pérdida_H108)

* [Principio de proporcionalidad](#Principio_de_proporcionalidad_H108)

# SANIDAD

## STJUE 7ª 15/6/23 C‑411/22. [Seguridad social](#Seguridad_social_H136). Concepto de “[prestaciones](#Prestaciones_H136) de enfermedad”. Libre circulación de los trabajadores. Ventajas sociales. [Discriminación](#Discriminación_H136). Justificaciones. [COVID-19](#COVID_H136). Aislamiento de trabajadores ordenado por la autoridad sanitaria nacional. [Indemnización](#Indemnizaciones_H136) de dichos trabajadores por el empresario. Reembolso del empresario por la autoridad competente. Exclusión de los trabajadores transfronterizos aislados en virtud de una medida adoptada por la autoridad de su Estado de residencia.

La **compensación**, financiada por el Estado, que corresponde a los trabajadores por los **perjuicios patrimoniales sufridos a causa de la imposibilidad de desarrollar su actividad profesional durante su aislamiento como personas que han contraído la COVID-19 o que son sospechosas de haberla contraído o de ser contagiosas**, no constituye una «prestación de enfermedad» contemplada en dicha disposición y, por tanto, no se halla comprendida en el ámbito de aplicación de ese Reglamento (*ex artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social*).

No cabe una normativa en virtud de la cual la concesión de una **compensación por las pérdidas de ingresos sufridas por los trabajadores como consecuencia de un aislamiento ordenado a raíz de un resultado positivo en el test de detección de la COVID-19** se supedita al requisito de que la imposición de la medida de aislamiento haya sido ordenada por una autoridad de ese Estado miembro con arreglo a dicha normativa (*ex artículos 45 TFUE y 7 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión*).

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [COVID](#COVID_H135)

* [Discriminación](#Discriminación_H135)

* [Indemnizaciones](#Indemnizaciones_H135)

* [Prestaciones](#Prestaciones_H135)

* [Seguridad social](#Seguridad_social_H135)

# SEGURIDAD

## STJUE Segunda 18/1/24 C-451/22. [Transporte aéreo](#Transporte_aérea_H137). Seguimiento de sucesos que pongan en peligro la [seguridad aérea](#Seguridad_aérea_H137). Confidencialidad de la información relativa a estos sucesos — Alcance de esta confidencialidad. Libertad de expresión y de información. Libertad de los medios de comunicación. Solicitud de información sobre la destrucción de una aeronave cuando sobrevolaba el Este de Ucrania, presentada por empresas que operan en el sector de los medios de comunicación.

El artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación, análisis y seguimiento de sucesos en la aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 1321/2007 y (CE) n.º 1330/2007 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, en relación con el derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que **la información en poder de las autoridades nacionales competentes sobre un «suceso» relativo a la seguridad aérea, en el sentido del artículo 2, punto 7, de dicho Reglamento, en su versión modificada, está sujeta a un régimen de confidencialidad que tiene como consecuencia que ni el público ni las propias empresas de medios de comunicación tengan derecho a acceder a ella de forma alguna**.

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [Seguridad aérea](#Seguridad_aérea_H136)

* [Transporte aéreo](#Transporte_aérea_H136)

# SEGURIDAD SOCIAL

## 

## STJUE 7ª 12/10/23 C-45/22. Seguridad social de los trabajadores migrantes. Acumulación de prestaciones de distinta naturaleza. Aplicación de las normas nacionales que prohíben la acumulación. Cálculo de la pensión de supervivencia. División de las cuantías de la prestación o prestaciones u otros ingresos, tal y como hayan sido computados, por el número de prestaciones. Concepto de “cuantías tal y como hayan sido computadas. [Inmigración](#Inmigración2_H138).

El artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el disfrute de prestaciones de distinta naturaleza o de otros ingresos exija la **aplicación de cláusulas antiacumulación** nacionales en lo referente a prestaciones independientes, permite a cada Estado miembro interesado establecer en su ordenamiento jurídico, al objeto de calcular la cuantía de la prestación que ha de abonarse, bien que procede dividir la cuantía total de los ingresos computados por esas cláusulas nacionales entre el número de prestaciones de que se trate, bien que procede dividir entre este mismo número la parte de los ingresos que exceda del límite máximo de acumulación determinado por dichas cláusulas nacionales.

## STJUE Sala Séptima 11/4/24 C‑116/23 [Inmigración](#Inmigración_H140). [Prestaciones familiares](#Prestaciones_familiares_H139). [Prestaciones por enfermedad](#Prestaciones_por_enfermedad_H140). Ámbito de aplicación. Prestación por cuidado de un familiar. Nacional de un Estado miembro que reside y trabaja en otro Estado miembro y presta asistencia a un miembro de su familia en el primer Estado miembro. Carácter accesorio a la asignación de dependencia. Igualdad de trato.

El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «**prestaciones de enfermedad**», a efectos de dicha disposición, comprende una **prestación por cuidado de un familiar** abonada a un trabajador por cuenta ajena que asiste o cuida a un **familiar beneficiario de una asignación de dependencia** en otro Estado miembro y que disfruta, por ello, de una excedencia no retribuida. Por consiguiente, tal prestación también está comprendida en el concepto de «**prestaciones en metálico**», en el sentido de ese Reglamento.

El artículo 45 TFUE, apartado 2, el artículo 4 del Reglamento n.º 883/2004 y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual la concesión de una **prestación por cuidado de un familiar** se supedita al requisito de que la persona atendida perciba una **asignación de dependencia** de un determinado nivel en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a menos que dicho requisito esté objetivamente justificado por una finalidad legítima relativa, en particular, al mantenimiento del equilibrio financiero del sistema de seguridad social nacional, y constituya un medio proporcionado para alcanzar esa finalidad.

El artículo 4 del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa o a una jurisprudencia nacional que, por un lado, supedita la concesión de una **prestación por cuidado de un familiar** y la de una **prestación de excedencia de solidaridad familiar** a requisitos diferentes y, por otro lado, no permite entender una solicitud de excedencia por cuidado de un familiar como una solicitud de excedencia de solidaridad familiar.

## STJUE Sala Séptima 25/4/24 C‑36/23 [Prestaciones familiares](#Prestaciones_familiares_H140). Normas de prioridad en caso de acumulación de prestaciones. Obligación de la institución del Estado miembro que es competente con carácter subsidiario de trasladar la solicitud de prestaciones familiares a la institución del Estado miembro que es competente con carácter prioritario. Inexistencia de una solicitud de prestaciones familiares en el Estado miembro de residencia del hijo. Recuperación parcial de las prestaciones familiares abonadas en el Estado miembro de la actividad por cuenta ajena de uno de los padres.

El artículo 68 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, por el que se adoptan las **normas de prioridad para casos de acumulación de prestaciones familiares**, debe interpretarse en el sentido de que, si bien no permite que la institución de un Estado miembro cuya legislación no sea aplicable con carácter prioritario de conformidad con los criterios previstos en el apartado 1 de dicho artículo le **reclame a la persona interesada la devolución parcial de tales prestaciones abonadas en dicho Estado miembro**, debido a la existencia de un **derecho a esas prestaciones previsto en la legislación de otro Estado miembro que es aplicable con carácter prioritario**, por el hecho de que en ese otro Estado miembro no se hubiera concedido ni desembolsado ninguna prestación familiar, sí permite a dicha institución **reclamar ante la institución que es competente con carácter prioritario el reembolso del importe de las prestaciones que supere aquel del que le corresponde hacerse cargo en virtud de lo dispuesto en el citado Reglamento**.

# ÍNDICE ANALÍTICO

* [Inmigración](#Inmigración_H139)

* [Prestaciones familiares](#Prestaciones_familiares_H138)

* [Prestaciones por enfermedad](#Prestaciones_por_enfermedad_H138)

# TELECOMUNICACIONES

## STJUE Sala Cuarta 17/11/22 C‑243/21 Telecomunicaciones. Competencia de la [autoridad nacional](#Autoridad_nacional_H182) de reglamentación para imponer condiciones establecidas ex ante que regulan el acceso a la infraestructura física de un operador sin peso significativo en el mercado. Inexistencia de conflicto sobre el acceso.

Arts. 1, apartados 3 y 4, y 3, apartado 5, de la Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15/5/14, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, en relación con los artículos 1, apartado 1, 5, apartado 1, y 8, apartado 3, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7/3/22, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso): no se oponen a que una **autoridad nacional de reglamentación** competente en el ámbito de las **comunicaciones electróni**cas obligue a un **operador de red**, que **no ha sido designado como operador con un peso significativo en el mercado**, a aplicar las condiciones establecidas ex ante por dicha autoridad, que regulan las **condiciones de acceso de empresas activas en este ámbito a la infraestructura física de ese operador**, incluidas las normas y formas de celebración de contratos y las tarifas de acceso aplicables, con independencia de la existencia de un conflicto sobre dicho acceso y de una competencia efectiva.

## STJUE Quinta 20/4/23 C-329/21. Redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Adjudicación de derechos de uso de [frecuencias](#Frecuencias_H143). Procedimiento de subasta. Sociedad holding no registrada como proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro de que se trata. Exclusión del [procedimiento de adjudicación](#Procedimiento_de_adjudicación_H143). Derecho a interponer recurso contra la decisión de adjudicación.

Un **procedimiento de selección para la adjudicación de derechos de uso de frecuencias y la decisión de adjudicación** a la que este da lugar tienen como objetivo fomentar y desarrollar una **competencia efectiva y no falseada**, con observancia de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. No es contrario a ese objetivo que tal procedimiento incluya una **fase de examen de la conformidad de las candidaturas con el correspondiente pliego de condiciones**, siempre que dicho procedimiento, en su conjunto, se ajuste a las exigencias y requisitos establecidos en el referido artículo 7 (*Ex artículo 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009*),

Tiene un **derecho de recurso** una empresa que ha participado, presentando su candidatura, en un **procedimiento de subasta en el sector de las comunicaciones electrónicas tramitado por la autoridad nacional de reglamentación de un Estado miembro distinto de aquel en el que esa empresa está establecida y lleva a cabo sus operaciones**. Aunque no presta ella misma un servicio de comunicaciones electrónicas en el mercado del Estado miembro objeto de dicho procedimiento, pero cumple los requisitos objetivos a los que se somete, en ese Estado miembro, la autorización general a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, con independencia de que controle, en su caso, a otra empresa que está presente en ese mercado. El recurso se plantea frente a la que la autoridad nacional de reglamentación que ha dictado un acuerdo que deniega el registro de su candidatura en el referido procedimiento por no cumplir los requisitos exigidos y que posteriormente ha adquirido firmeza de resultas de una resolución judicial desestimatoria de un recurso dirigido contra ese acuerdo a los efectos de impugnar la posterior decisión mediante la que dicha autoridad nacional de reglamentación adjudicó a terceros el contrato objeto del procedimiento de subasta, siempre que el recurso interpuesto por esa empresa no quebrante la fuerza de cosa juzgada de dicha resolución judicial (*ex artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*).

## STJUE Tercera 30/1/24 C‑255/21. Servicios de [comunicación audiovisual](#Comunicación_audiovisual_H143). Límites impuestos al tiempo de difusión horaria de [publicidad](#Publicidad_H143) televisiva. Excepciones. Concepto de “anuncios realizados por el organismo de radiodifusión televisiva en relación con sus propios programas”. Anuncios emitidos por ese organismo para promocionar los programas de una emisora de radio que pertenece al mismo grupo de radiodifusión que dicho organismo.

El artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), debe interpretarse en el sentido de que el concepto de **«anuncios realizados por el organismo de radiodifusión televisiva en relación con sus propios programas»** no comprende los anuncios promocionales emitidos por un organismo de radiodifusión televisiva referidos a una emisora de radio que pertenece al mismo grupo de sociedades que ese organismo de radiodifusión televisiva, salvo si, por un lado, los programas que son objeto de esos anuncios promocionales son «servicios de comunicación audiovisual» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a), de tal Directiva —lo que supone que sean disociables de la actividad principal de esa emisora de radio— y si, por otro lado, el mencionado organismo de radiodifusión televisiva ostenta la «responsabilidad editorial» de tales programas, en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra c), de dicha Directiva.

## çSTJUE Quinta 16/3/23 C339/21. Redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Permiso de [interceptación](#Interceptación_H143) legal por las autoridades nacionales competentes. Normativa nacional en materia de reembolso de los costes derivados de las actividades de interceptación ordenadas a los operadores de telecomunicaciones por las autoridades judiciales. Inexistencia de mecanismo de reembolso íntegro. [Principios de no discriminación](#Principio_de_no_discriminación_H143), [proporcionalidad](#Principio_de_proporcionalidad_H143) y [transparencia](#Principio_de_transparencia_H143).

Es conforme una normativa nacional que no exige que se proceda al reembolso íntegro de los **costes efectivamente soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas cuando permiten la interceptación legal de comunicaciones electrónicas por las autoridades nacionales competentes**, siempre que esa normativa sea no discriminatoria, proporcionada y transparente (*ex artículo 13 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, interpretado a la luz del artículo 3 de esta, y el anexo I, parte A, punto 4, de la misma Directiva*).

**ÍNDICE ANALITICO**

* [Autoridad nacional](#Autoridad_nacional_H179)

* [Comunicación audiovisual](#Comunicación_audiovisual_H142)

* [Frecuencias](#Frecuencias_H141)

* [Interceptación](#Interceptación_H142)

* [Principio de no discriminación](#Principio_de_no_discriminación_H142)

* [Principio de proporcionalidad](#Principio_de_no_discriminación_H142)

* [Principio de transparencia](#Principio_de_transparencia_H142)

* [Procedimiento de adjudicación](#Procedimiento_de_adjudicación_H141)

* [Publicidad](#Publicidad_H142)

# TRANSPORTES

## STJUE (Sala Primera) 8/9/22 C‑614/20 Servicios públicos de transporte de viajeros por [ferrocarril](#Ferrocarril_H184) y [carretera](#Transportes_de_carretera_H144). Imposición mediante reglas generales de una obligación de transporte gratuito de determinadas categorías de viajeros. Obligación de que la autoridad competente conceda a los operadores una compensación de servicio público. Método de cálculo.

El concepto de **«obligación de servicio público»** incluye la obligación (establecida en una disposición legislativa nacional), que se impone a las empresas que presten un servicio público de transporte por carretera y por ferrocarril en el territorio del Estado, consistente en transportar gratuitamente y sin recibir una compensación del Estado a determinadas categorías de viajeros, en particular, niños en edad preescolar y determinadas categorías de personas discapacitadas (cfm art. 2, letra e), del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016).

Las autoridades competentes están obligadas a conceder a las empresas afectadas una **compensación** por la incidencia financiera neta, positiva o negativa, en los costes e ingresos que para ellas se hayan derivado del cumplimiento de la anterior obligación, establecida mediante una regla general (cfm arts. 3, apartado 2, y 4, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.º 1370/2007, en su versión modificada por el Reglamento 2016/2338).

Las compensaciones por la incidencia financiera neta, positiva o negativa, en los costes e ingresos ocasionados por el cumplimiento de las obligaciones tarifarias establecidas mediante reglas generales, dirigidas a fijar tarifas máximas para determinadas categorías de viajeros, deben concederse con arreglo a los principios definidos en los artículos 4 y 6 y en el anexo de dicho Reglamento, de manera tal que **se evite una compensación excesiva**. La compensación no puede rebasar el importe correspondiente a la incidencia financiera neta, que equivale a la suma de las incidencias, positivas o negativas, del cumplimiento de la obligación de servicio público en los costes y los ingresos del operador de servicio público, que se deben evaluar comparando la situación de cumplimiento de la obligación de servicio público con la situación que se hubiera producido si la obligación no se hubiera cumplido (cfm art. 3, apartado 2, y el punto 2 del anexo del Reglamento n.º 1370/2007, en su versión modificada por el Reglamento 2016/2338).

## STJUE Sala Tercera 6/10/22 C‑266/21 Transportes. Suspensión del derecho a conducir un vehículo de motor. [Permiso de conducción](#Permiso_de_conducción_H144) expedido por el Estado de residencia normal por canje de un permiso de conducción expedido por otro Estado. Negativa del primer Estado a ejecutar una resolución de suspensión del derecho a conducir adoptada por el segundo Estado. Obligación del segundo Estado de no reconocer, en su territorio, la validez del permiso de conducir suspendido.

Art. 11, 2, en relación con el aptdo. 4, pfo. 2º, del mismo art., de la Directiva 2006/126/CE, de 20/12/06, sobre el **permiso de conducción**: se autoriza al Estado miembro de residencia normal del titular de un permiso de conducción, expedido por dicho Estado, a **no reconocer ni ejecutar en su territorio una resolución de suspensión del derecho a conducir un vehículo de motor**, adoptada respecto de ese titular por otro Estado miembro, con motivo de una infracción de tráfico cometida en el territorio de este último, incluso cuando dicho permiso de conducción ha sido expedido por canje de un permiso de conducción que fue expedido anteriormente por el Estado miembro en el que se cometió tal infracción de tráfico.

## STJUE Sala Décima 13/10/22 C‑437/21 Contratos de servicio público. Transportes. Servicios públicos de [transporte marítimo](#Transporte_marítimo_H184) rápido de viajeros. Asimilación a servicios de transporte ferroviario efectuado por vía marítima.

Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7/12/92, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), y en particular sus arts. 1, apartado 1, y 4, apartado 1: se opone a una normativa nacional que tiene por objeto asimilar servicios de transporte marítimo a servicios de transporte ferroviario, cuando dicha asimilación produce el efecto de **excluir el servicio de que se trate de la aplicación de la normativa en materia de contratos públicos que le es aplicable**.

## STJUE Octava de 21/3/24 C‑703/22 [Transportes por carretera](#Transportes_de_carretera_H145). [Permiso de conducción](#Permiso_de_conducción_H145). Condiciones de expedición o de renovación. Normas mínimas relativas a la aptitud física y mental. Visión. Principio de proporcionalidad. Persona que no cumple la norma relativa al campo visual. Dictamen favorable a la aptitud para conducir emitido por expertos médicos. Margen de apreciación en un caso individual a falta de excepción expresa.

El punto 6.4 del anexo III de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por la Directiva 2009/113/CE de la Comisión, de 25 de agosto de 2009, leído a la luz del principio de proporcionalidad y del artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en un caso concreto, pueda considerarse que una persona que desde el punto de vista médico no cumple el requisito que establece —según el cual, los conductores del grupo 2, a saber, de vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E, **deben tener un campo visual horizontal con ambos ojos como mínimo de 160 grados**— cumple ese requisito si, según varios expertos médicos, es efectivamente apta para conducir vehículos de motor de una de estas categorías.

**ÍNDICE ANALÍTICO**

* [Ferrocarril](#Ferrocarril_H182)

* [Permiso de conducción](#Permiso_de_conducción_H183)

* [Transportes de carretera](#Transporte_por_carretera_H182)

* [Transporte marítimo](#Transporte_marítimo_H183)